



Center for Inter-American Relations

# Public Affairs

---

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA EN CHILE:

FACTORES CONDICIONANTES

Edgardo Boeninger K.

August, 1980

Prepared for presentation at

DEMOCRACY IN CHILE

Bellagio, Italy

October 27-31, 1980

Discussion paper: Not to be  
quoted or reproduced in any  
form without written permis-  
sion from both the author and  
the Center for Inter-American  
Relations

## I N D I C E

I.	De la democracia al golpe de Estado	1
II.	La evolución del gobierno militar: la instalación de la coalición gobernante	5
III.	La nueva fase: el intento hegemónico	9
	1. El proyecto político: los acuerdos de la coalición gobernante	9
	2. Algunos conflictos al interior del régimen	13
IV.	La oposición	14
V.	¿Longevidad o institucionalización? Fuerza y debilidad del régimen autoritario chileno	22
	1. ¿Puede consolidarse el régimen autoritario chileno?	22
	2. La fuerza del régimen y su prolongación posible	25
VI.	Restauración y consolidación de la democracia. La interdependencia entre la transición y el mediano plazo.	29
VII.	Los problemas de la consolidación	32
VIII.	Los problemas de la transición	39
IX.	Un comentario final	46

## El retorno a la democracia en Chile: factores condicionantes

Edgardo Boeninger K.

Agosto de 1980

### I. De la democracia al golpe de Estado.

Es ya un lugar común recordar la tradición democrática chilena y reafirmar que durante casi 150 años sólo episodios de corta duración interrumpieron el funcionamiento del régimen político democrático. Así fué en efecto, pese a las reservas que legítimamente pueden plantearse respecto de su amplitud, especialmente en lo que respecta al período conocido como la república conservadora (1831-1861).

Como se señala en un trabajo anterior ( E.Boeninger, Chile: su futura democracia, en Futura instituci-nalidad de la paz en Chile, CISEC 1977) "al amparo de una disponibilidad relativamente adecuada de recursos fué posible satisfacer las demandas básicas de los sucesivos sectores emergentes, incluida su presencia activa en el escenario político nacional. La incorporación de nuevos actores sociales pudo así realizarse progresivamente sin afectar la estabilidad de la institucionalidad democrática del país. Pese a que la depresión mundial puso término a la bonanza del comercio exterior, hubo posteriormente una nueva etapa de expansión dinámica que correspondió al período de industrialización por sustitución de importaciones".

"El comienzo de la crisis que habría de extenderse hasta el presente coincide con el relativo estancamiento económico cuyas primeras manifestaciones se producen a mediados de la década del 50.

Paralelamente a esta pérdida de impulso aumentan en forma cada vez mas acelerada las aspiraciones de las masas ya participantes o en vías de incorporación, registrándose un desequilibrio creciente entre expectativas sociales y progreso real" (ibid).

En estas condiciones la pugna distributiva se tornó progresivamente mas aguda y cundió la percepción de que se estaba en un juego de "suma cero". En el contexto de un proceso social y político muy complejo que no corresponde analizar aquí, se fué generando un enjuiciamiento cada vez mas ideológico de una realidad que todos los sectores concordaban en criticar con creciente acritud.

Surgieron así, en definitiva, los proyectos políticos excluyentes y la tripolarización que caracterizó a Chile a partir de 1958. En tres períodos presidenciales sucesivos se promovieron el capitalismo liberal, la "revolución en libertad" y la "vía chilena al socialismo". La Derecha política y económica tradicional, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular fueron respectivamente los portadores de estos intentos de encontrar un nuevo camino para Chile. Cada uno de ellos se enfrentó a la oposición intransigente de los dos sectores restantes, de modo que en los tres períodos mencionados fué siempre una minoría la que procuraba imponer su proyecto al resto del país.

El proceso señalado evolucionó hacia una hipermovilización social y política que culminó con la intervención militar del 11 de Septiembre de 1973 y el consiguiente derrumbe de la democracia chilena.

A los fines del presente trabajo es necesario tener presente,

entre otros, los siguientes aspectos del proceso tan sintética y parcialmente resumido:

1. La democracia chilena exhibió una notable estabilidad y una alta capacidad de asimilar y dar participación a nuevos sectores sociales a través de la mayor parte de su historia independiente.
2. Los últimos años de régimen democrático estuvieron, sin embargo, caracterizados por una confrontación dura que convirtió en enemigos a sectores y personas que anteriormente habían sido sólo adversarios. Si bien la violencia producida fué predominantemente verbal, la experiencia vivida fué traumática para la mayoría de los chilenos. Los oponentes del conflicto desarrollaron una recíproca percepción de ame-  
naza que destruyó el margen de tolerancia necesario para una convivencia social reglada por las normas de un sistema político democrático.
3. La sociedad chilena se dividió en tres bandos, identifica-  
dos con los proyectos socio-políticos antes mencionados. La bipolarización producida durante el gobierno de la Unidad Popular fué determinada por hechos concretos de ese período que en sus etapas finales condujeron a la unificación y glo-  
balización del conflicto. Así emergió una alianza transitoria de los opositores contra el enemigo de ambos que "jugaba las car-  
tas" desde la posición de poder dada por el control del aparato gubernativo.

Lo que se quiere destacar aquí es que no desaparecieron el 11 de Septiembre las razones de la anterior fragmentación tripolar, profundamente enraizada en la realidad nacional

4. Entre los hitos mas significativos del proceso de agudización de la crisis se cuenta el progresivo abandono de la democracia política como instrumento viable de la "construcción del socialismo", que caracteriza a algunos sectores de izquierda a partir del congreso de Chillán del Partido Socialista (1967) y la paralela evolución del derechista Partido Nacional cuyo control pasó de la derecha tradicional de raíz conservadora y liberal, a manos de los sectores no-democráticos provenientes del nazismo, del nacionalismo estancuquerista y otros grupos similares.
  
5. En la fase final de la crisis, la confrontación se dió también al interior de las Fuerzas Armadas y se resolvió al modo militar, es decir con la derrota de las posiciones en pugna, en este caso la de los partidarios de seguir apoyando al régimen del Presidente Allende. Así lo dejaron establecido los primeros comunicados de la Junta de Gobierno.

De este modo la intervención militar del 11 de Septiembre no fué un arbitraje neutral por encima y al margen de los sectores en conflicto. La verdad es que no podía serlo dada la intensidad y globalización del mismo, una de cuyas expresiones fué un esfuerzo sistemático de significativos sectores de gobierno y oposición por obtener el apoyo de los institutos armados o para producir su división interna.

En suma, las Fuerzas Armadas actuaron en contra del conjunto de fuerzas sociales y políticas que conformaba el gobierno de la Unidad Popular y a partir del 11 de Septiembre le declararon la guerra.

II. La evolución del gobierno militar: La instalación de la coalición gobernante.

Un primer aspecto a considerar es el paso del momento inicial de un movimiento que fué fundamentalmente militar, sin perjuicio de las connivencias y apoyos que se conocen y/o presumen, a la configuración de una coalición gobernante que impone un régimen autoritario, cuyos socios, características y proyecto de futuro se perfilan cada vez con mayor nitidez.

Dado el nivel de polarización existente, todos los grupos que en 1973 reconocían filas en la oposición al gobierno de Allende, podían potencialmente ser considerados como eventuales adherentes del gobierno militar. Sin embargo, un conjunto de hechos y circunstancias produjo una rápida decantación posterior.

En primer término, el alto nivel de coerción utilizado para imponer y consolidar el nuevo régimen, situación que se mantuvo por un período prolongado, produjo la inevitable auto-exclusión de la Democracia Cristiana, la Social-Democracia y demás sectores democráticos opuestos a la U.P., además de una hostilidad progresivamente creciente de amplios sectores de la Iglesia.

Por otra parte, el gobierno militar como es normal en los de su especie, no permitió la supervivencia de organizaciones sociales autónomas ni propició su desarrollo (por lo menos hasta 1978), lo que también contribuyó a colocar a la Junta Militar en pugna con la DC y con sectores eclesiásticos. En el caso chileno esta actitud castrense se manifestó de manera mas clara y tajante, debido al predominio secular de los partidos de la izquierda marxista (P.C. y P.S.) en las grandes organizaciones de trabajadores. Es así como las tendencias populistas y participacionistas

iniciales de algunos militares fueron rápidamente descartados y alejados sus sostenedores del desempeño de funciones ejecutivas.

En razón de lo anterior fué drásticamente suprimida la libertad sindical. De este modo, el gobierno militar no tardó en adquirir la fisonomía de un régimen excluyente en el que los trabajadores (urbanos, mineros y campesinos por igual) no tenían acceso a las instancias de decisión política ni participación alguna en los asuntos del Estado. Una manifestación significativa de este hecho es la debilidad extrema y papel menguado desempeñado por estructuras de trabajadores oficialistas como la "Untrach", que nunca recibió un real y activo apoyo de parte del gobierno.

La definición excluyente y anti-participacionista a que se alude era por lo demás, congruente con la percepción de encontrarse en estado de guerra que caracterizó a los altos mandos militares. De acuerdo a su esencial sentido jerárquico, tal concepto significó la exigencia de incondicionalidad para todo sector que aspirara a ser "socio en el gobierno.

Así planteadas las cosas, los aliados naturales y únicos del nuevo gobierno fueron quienes ofrecieron adhesión irrestricta. Adoptaron tal actitud los que aceptaban (o incluso propiciaban) la represión física drástica ejercida contra la Unidad Popular y sus simpatizantes y que, al mismo tiempo, estuvieron dispuestos a renunciar a su autonomía y libertad políticas a cambio de seguridad, en términos de orden y de protección a la propiedad privada. Así se comprometió con el régimen el gran capital y la inmensa mayoría de la derecha política y del empresariado. Este último estuvo dispuesto a aceptar diversos sacrificios

(mayor competencia vía la apertura al exterior, reducción de demanda, etc.) a cambio de la protección ofrecida y de la posibilidad de consolidación patrimonial.

A las observaciones anteriores cabe añadir que los militares chilenos, a diferencia de sus colegas brasileños, peruanos y argentinos no se habían preparado expresamente para gobernar. No habían estudiado los problemas económicos-sociales de manera sostenida y sistemática, poco entendían del funcionamiento de la economía, carecían de ideología y no tenían experiencia política. Vale decir, su visión de las cosas no había correspondido, hasta entonces, al "nuevo profesionalismo" en los términos recientemente empleados por A. Stepan.

En el área económica hubo una etapa inicial en que los propios militares trataron de conducir la economía con la asesoría de algunos expertos civiles, elegidos a título individual. Pronto surgió, sin embargo, un grupo homogéneo de alto nivel técnico, seguro de sí mismo, portador de un modelo preciso, claro y nítido, planteado con la arrogante afirmación de ser la verdad científica. Indiferente u hostil a la democracia política, al "Grupo Chicago" no le preocupaban los excesos de la "Dina", por lo que ofrecía, también, un apoyo total e incondicional.

A esos factores, el equipo Chicago añadió un aporte de gran significación. Sus excelentes relaciones e importantes vínculos con círculos financieros de Estados Unidos y Europa, le permitió obtener un apoyo muy importante que se tradujo en una gran afluencia de créditos de la banca privada mundial, los que consolidaron la situación de la balanza de pagos y favorecieron la rápida expansión de los grupos económicos.

En definitiva, los "Chicago boys" han permitido equilibrar, por vía de este apoyo financiero, la evidente y generalizada hostilidad política exterior que el gobierno ha debido enfrentar. Estos hechos han dado a la tecnocracia económica dirigente un gran poder al interior del gobierno, al punto que se ha convertido en el soporte principal del régimen. No es extraño, entonces, que pese a las dudas que el esquema económico aplicado debe haber despertado en diversos sectores militares, el General Pinochet les haya otorgado el más amplio y permanente apoyo.

Por último, el "antimarxismo" y la defensa de la propiedad privada se suman a la concepción normativa del bien común al que puede conducir la "recta razón", para convertir a los sectores "nacionalistas" e "integristas" en otra importante fuente de sustentación del régimen. Sus planteamientos son aptos para justificar un modelo político no-democrático, además de lo cual su condena de la "corrupción provocada por el marxismo y por la politiquería en general", sirvió al régimen para vestir su misión de un carácter de cruzada moral purificadora.

La clase media, concepto por cierto impreciso, caracterizada por un alto grado de heterogeneidad, no es parte de la estructura de poder político y económico antes descrita. Un sector importante de este decisivo conglomerado social adhirió al actual régimen, en base a que sólo un gobierno autoritario que asegura orden y disciplina, garantiza a la clase media la no recurrencia de amenazas a la propiedad privada y a la libre educación de sus hijos y, en definitiva la protege del "totalitarismo marxista".

Desde el punto de vista económico-social, el modelo liberal vigente ofrece a una fracción no depreciable de la clase media expectativas de acceso a mayores niveles de consumo y a la consi-

guiente movilidad social (los profesionales , por ejemplo) así como ha deprimido el nivel de vida de otros grupos como es el caso de los empleados públicos y de pequeños empresarios de diverso tipo.

En síntesis, una proporción significativa de la clase media ha sido una suerte de socio pasivo del régimen y le ha dado cierto grado de respaldo social.

A la constatación anterior cabe añadir, sin duda, el capital extranjero que tiene actitud favorable al régimen aunque no se haya producido, hasta ahora, de su parte, una contribución importante, como lo demuestran las menguadas cifras de inversión extranjera.

### III. La nueva fase: el intento hegemónico.

#### III.1. El proyecto político: Los acuerdos de la coalición gobernante.

A medida que fue pasando el tiempo, la coalición gobernante pareció adquirir mayor conciencia de su carácter de tal y de su común necesidad de conservar el poder y consolidar el régimen autoritario. En una primera etapa, la síntesis de tal predicamento quedó adecuadamente reflejada en la reiterada afirmación de que el gobierno tenía metas y no plazos, formulación vaga y defensiva cuya principal justificación parecía radicar en la doctrina de la seguridad nacional, la guerra anti-subersiva y los consiguientes objetivos de orden público, "unidad nacional" y "hacer de Chile una gran nación".

Muy distinta es la situación actual. La coalición gobernante aunque no exenta de contradicciones y conflictos internos a los cuales se hará referencia explícita en párrafo posterior, ha concordado en un proyecto político de gran alcance y precisa justificación. A los ingredientes ya conocidos del anti comunismo, el orden y la disciplina se agregan concepciones mas sustantivas. La modernización capitalista, basada en la libre iniciativa individual, en el funcionamiento irrestricto del mercado, la prescindencia del Estado y en general, un esquema ultraliberal, es presentado como el único camino conducente a un desarrollo acelerado y como sinónimo de eficiencia. Los problemas distributivos son eliminados de la agenda de discusión de los asuntos públicos, pues el bienestar material de las mayorías nacionales será resultado automático del crecimiento económico. En el terreno político se presenta a la república conservadora de neto corte autoritario (1831-61) como el único período de verdadera grandeza en la historia nacional y como respuesta requerida para hacer frente a la "amenaza marxista", la demagogia, la política, el populismo y demás males de la sociedad contemporánea que se traducen en demandas incontroladas de las masas e imposibilitan un crecimiento económico ordenado y eficiente.

Se amalgaman así autoritarismo político y liberalismo económico en un proyecto autocrático de modernización capitalista. Se configura un modelo de sociedad plenamente satisfactorio para el gran capital y, en general, para la derecha chilena la que percibe que, por vez primera en este siglo, está en posesión de una ideología potente y de una posibilidad cierta de consolidar su poder. Para el empresa-

riado (entendido como la empresa productiva privada promedio) el proyecto así concebido constituye una solución óptima, pues le permite desarrollar sus actividades sin la perturbación de los problemas laborales y en la seguridad de estar libre del cuestionamiento radical de la izquierda, de la hostilidad doctrinaria de cristianos y social demócratas y, en general, de las críticas e interferencias provenientes de una clase política empeñada en intentos redistributivos. Cabe hacer notar que esto no implica necesariamente un compromiso ideológico permanente del empresariado, tradicionalmente acomodaticio en materias políticas, sino el aprovechamiento máximo de una situación favorable a sus intereses.

Las Fuerzas Armadas, embarcadas por sus altos mandos actuales en la aventura autoritaria parecen haber "comprado" también el modelo económico. La bandera de la modernización y la eficiencia resulta atrayente para una institución de elevado nivel profesional, consciente del impresionante ritmo de avance de la tecnología militar y de la necesidad de apoyo material y organizativo requerido por el potencial propiamente bélico. Una economía fuerte y moderna es, en este sentido, también una prioridad militar. Estas y otras consideraciones complementan y racionalizan factores más inmediatos como el goce y acostumbramiento al poder, la incorporación al "sistema" y su nuevo status social y por fin (last but not least) el temor a la "vendetta".

El mayor esfuerzo de la coalición gobernante se dirige a lograr la adhesión de la clase media para el proyecto formulado. En primer término, se recurre al anticomunismo, sin duda un instrumento poderoso que apela a un sentimiento muy

arraigado en diversos sectores de la sociedad chilena que se vio exacerbado durante el período de la Unidad Popular por las "tomas", la violencia verbal, los planteamientos de la izquierda maximalista , las brigadas de choque callejero y, en fin, el desorden generalizado. El anticomunismo trasciende a la coalición gobernante e incluye a una fuerte proporción de clase media, mujeres y campesinos que constituyen una base social importante de demócratas cristianos, social demócratas y otros sectores opositores. La máquina publicitaria del gobierno se ha encargado de dar una dimensión demonológica a esta cuestión al mismo tiempo que procura identificar toda posición de izquierda como "comunismo"

Desde otro punto de vista se le dice a la clase media (ver por ejemplo, Jaime Guzmán en "El camino político") que le conviene adherir a la prolongación del régimen autoritario porque sólo de esa manera estará a cubierto de la explosión de demandas populares que no podrían satisfacerse sino a costa de las "conquistas" de la clase media, mientras no concluya el proceso de modernización que sí proveerá, en el largo plazo, una riqueza suficiente al alcance de todos.

El instrumento formal para materializar el proyecto hegemónico así descrito, es la llamada nueva institucionalidad conformada por el anteproyecto de Constitución y el período denominado de transición. La lectura de este documento corrobora las afirmaciones que anteceden, las que constituyen un marco fundamental de referencia para el análisis de los factores que afectan el retorno a la democracia en Chile. La convocatoria a plebiscito en base a un esquema aún más desembozadamente dictatorial, con una "perpetuación" mínima en el poder del General Pinochet por unos 18 años, confirma las aseveraciones anteriores.

### III.2. Algunos conflictos al interior del régimen.

Si bien los socios de la coalición gobernante parecen estar de acuerdo en los grandes lineamientos del proyecto político antes descrito, no todo es armonía entre ellos, como lo atestiguan las reiteradas escaramuzas entre "duros" y "blandos", como han sido bautizados los dos sectores en pugna.

La democracia a largo plazo, "protegida" y "controlada", vale decir bajo control hegemónico de una elite económica, social, política y militar es la alternativa promovida por los "blandos". Estos estiman que por razones internas y de relaciones internacionales no es posible mantener indefinidamente la clausura del sistema político y confían en que la transición que proponen les dará el tiempo y los instrumentos suficientes para consolidar su hegemonía, en el contexto de un desarrollo capitalista sólidamente arraigado.

Los "duros", por su parte, rechazan toda forma de democracia y propugnan el "Estado Militar" y otras exóticas fórmulas políticas. Es probable que en la posición de muchos personeros de este sector influya la percepción de que una apertura, aunque sea parcial y cautelosa, es un proceso dinámico que tiende a escaparse del control de quienes lo promueven. Sin embargo, de tanta o mayor importancia que esta divergencia de criterio es el hecho de que se ha producido en relación con dicha cuestión una contradicción entre las razones de la Derecha y la lógica del General Pinochet.

En efecto, el interés principal de la Derecha es consolidar el régimen actual, en tanto que el General Pinochet se mue-

ve en función de su propia continuidad indefinida en el Poder. No se trata de una mera tentación mesiánica, sino de una conducta casi inevitable en todo gobernante de este tipo. Es sabido que un régimen que no tiene un sistema formal de sucesión tiende a derrumbarse cuando desaparece la persona que lo encarna. La Derecha tiene plena conciencia de este hecho y, por ello, ejerce toda la presión de que es capaz con el objeto de obligar al General Pinochet y a los "duros" a aceptar su tesis, lo que es tenazmente resistida por éstos. En definitiva, a los "blandos" no parece importarles la duración de la transición ni el período que pueda permanecer el General Pinochet en el Poder, siempre que exista un procedimiento, formalmente legitimado, que permita su reemplazo o sucesión en cualquier eventualidad futura.

Un segundo conflicto cuya naturaleza y proporciones no se percibe aún con claridad al momento de escribir estas líneas, dice relación con la aparente confrontación entre los servicios de seguridad oficiales y grupos "informales" de terroristas adictos al régimen. Tampoco se sabe si estos hechos están o no vinculados a los fraudes tributarios recientemente descubiertos en los que se ha sugerido reiteradamente que estarían implicadas personas ligadas a la ex\_DINA. En todo caso, parece que se está en presencia de las primeras manifestaciones del tipo de corrupción y de lucha intestina que suele ser un talón de Aquiles de los regímenes autocráticos.

#### IV. La oposición.

La oposición al régimen autoritario debe ser analizada

desde el ángulo estrictamente político y en la perspectiva de fuerzas, clases e instituciones sociales.

La "cara visible" de la oposición está, sin duda, constituida por los partidos políticos. A ello contribuye tanto su ya larga tradición y el rol histórico por ellos desempeñado en Chile, como la persistente campaña gubernativa en su contra que ha realizado su condición de organizaciones anti-sistema en relación al régimen autoritario. Su influencia, al menos en las décadas mas recientes, ha sido considerable, no por el número de sus militantes sino por su penetración en las organizaciones sociales mas importantes del país (sindicatos y movimiento estudiantil por ejemplo) y por su capacidad de formar y orientar opinión en torno de los principales problemas nacionales.

Las restricciones a que han estado sometidos -receso y disolución formal y su consiguiente clandestinidad (izquierda) o semi-clandestinidad (D.C. y S.D.) los ha ciertamente afectado, pero no ha logrado eliminar su gravitación en la vida nacional. Aunque no hay información suficiente al respecto, recientes elecciones en el campo sindical y universitario apuntan a que los partidos conservan plena vigencia en las organizaciones de trabajadores en tanto que acusan mayor debilidad entre la juventud universitaria.

El gobierno no ha querido o no ha sido capaz de crear un movimiento político en apoyo de su gestión. Además, en su afán de "despolitizar" al país y destruir a los partidos políticos ha mantenido severamente reprimida toda actividad política, al mismo tiempo que se ha visto obligado a abrir algunos espacios de libertad a nivel sindical y estudiantil, con lo que la actividad política se ha trasladado en alguna medida a estos ámbitos.

Un examen mas específico, sin embargo, revela que los partidos políticos no están, aún, en condiciones de ejercer un liderato cohesionado en un proceso de restauración democrática. En primer término la inexistencia de un partido democrático de derecha, deja un vacío que no puede ser llenado por otros grupos, con lo que carece de posibilidad de afiliación un importante sector profesional y de clase media al que resulta así mas difícil de comprometer o reconquistar para la causa democrática. Por su parte, la Socialdemocracia, fusión parcial de diferentes fracciones del partido Radical, no tiene aún raíces sociales suficientes (parece particularmente débil en los sectores populares y en la juventud en general) para desempeñar un papel importante en este sector ni en el de la izquierda que se analiza a continuación.

En ese otro sector del espectro político, las reiteradas divisiones internas y consiguiente percepción de atomización que existe respecto del Partido Socialista, ha producido otro vacío importante. Como, además, la que parece ser la fracción mas importante de este partido (al menos a nivel de dirigentes que es lo que se ve) se ha acercado visiblemente al Partido Comunista, no hay un conglomerado suficientemente significativo que sea expresión orgánica de lo que podría denominarse una izquierda socialista o no-comunista. La supervivencia de grupos menores como Mapu, Partido Radical e Izquierda Cristiana no es obviamente, solución para este problema.

Así planteadas las cosas, el mapa político chileno está marcado por el predominio de los dos partidos mas grandes y mas organizados que son el Demócratacristiano y el Comunista. Esta peculiar bipolaridad es un factor que limita seriamente las posibi-

lidades de acción conjunta eficaz de los partidos de oposición. En efecto, por las razones ya enunciadas, en especial el "anticomunismo", una proporción considerable de los chilenos percibe como carente de legitimidad y en definitiva como espúrea una eventual alianza DC-PC. Esto no es una mera cuestión de directivas sino un sentimiento generalizado en un fuerte sector de la base social demócratacristiana (incluidos campesinos y organizaciones de trabajadores, en especial, empleados). No contribuye a disipar este antagonismo, la ortodoxa posición prosoviética que exhibe el partido comunista chileno, la que contrasta con el eurocomunismo de significativo desarrollo reciente en los países occidentales.

La escasa disponibilidad de referentes empíricos limita sin duda, la validez de cualquier juicio que pueda emitirse sobre las actitudes de los diversos grupos sociales de modo que en las opiniones que siguen, hay, inevitablemente, un alto grado de subjetividad.

Pese a lo anterior, quien esto escribe tiene percepciones bien nítidas respecto de estas materias. En primer término, parece indudable que los sectores populares son en su inmensa mayoría contrarios al régimen actual. Han sido ellos los más afectados por el proceso de concentración de la riqueza y del ingreso, y los que en mayor medida han sufrido y siguen siendo las víctimas del alto nivel de desempleo, incluido el programa de empleo mínimo. Excluidos, por otra parte, de toda participación y acceso a las decisiones nacionales, han experimentado la verticalidad social impuesta por un régimen que no les asigna más papel que obedecer y producir. Expresión de esta "nueva inferioridad" es, por ejemplo, el rigor con que proceden las fuerzas policiales y de seguridad en los llamados "operativos" o allanamientos

en las poblaciones como lo es también la soberbia que exhiben los círculos dirigentes civiles y su abierto menosprecio por el pueblo "inculto" e "inmaduro" al que, incluso, algunos personajes exacerbados han llegado a sostener que debe negársele el derecho a voto. Por fin, la aplicación del Plan Laboral, ha sido una prueba concluyente de todo lo anterior, pues poca duda le cabe a los trabajadores de que se trata de un instrumento concebido para dirimir los conflictos laborales en favor del capital o, al menos, para dar al empresario el control de la situación.

En suma, puede afirmarse, que en las clases populares cunde la percepción aguda de que el actual es el gobierno "de los ricos y para los ricos". Los resultados de las elecciones sindicales efectuadas en meses recientes, indican, entre obreros y empleados por igual, un predominio abrumador de la oposición, tanto demócratacristiana como de izquierda.

De esta última observación se deduce que un sector de clase media - claramente parece ser el caso de muchos empleados públicos - comparte la posición de los sectores populares. Hay indicios de una evolución en la misma dirección de gremios que como los camioneros y taxistas fueron, en un comienzo firmes partidarios del gobierno militar. Resulta sintomático, que los dirigentes de los empleados particulares hayan ido adoptando posiciones disidentes más acentuadas que si bien limitadas al campo laboral dejan translucir su condición básica de opositores

Pese a lo anterior, la posición de la clase media dista de ser uniforme, así como socialmente exhibe una gran heterogeneidad. Hay sectores profesionales, de medianos empresarios, comerciantes, gran número de mujeres y empleados de nivel medio y alto que por diversas razones mantienen su adhesión al actual régimen o son indiferentes al acontecer público. Esta última

posición naturalmente favorece, de hecho, la mantención del statu-quo político.

Son varios los factores que contribuyen a este fenómeno. Por una parte, el orden y la seguridad, banderas del gobierno, son prioridades sentidas de un amplio sector de la clase media, propenso también a un anti-izquierdismo visceral y a despre-  
ciar "lo político". La persistente publicidad gubernativa, amparada en un cuasi-monopolio de los medios de comunicación ha sido efectiva en este sentido, como también lo es la propaga-  
ción de valores que promueven el egoísmo por sobre la solida-  
ridad y estimulan el "plan unidual" de vida en desmedro de toda preocupación por causas colectivas.

Desde otro punto de vista, el modelo económico ultra liberal vigente -concentrador e injusto, por cierto- abre perspecti-  
vas de incorporación a niveles mas altos de consumo y expec-  
tativas de movilidad social a una capa media de magnitud no despreciable. Es a esos sectores, que se dirige de preferen-  
cia el mensaje ideológico del gobierno. Se les dice que serán ellos los favorecidos por la modernización capitalista en mar-  
cha y que es a ellos, también, a quienes el régimen político autoritario protege contra la explosión de demandas populares "irracionales y demagógicas".

En definitiva, en las contradictorias posiciones de diferen-  
tes segmentos de la clase media parece resultar decisiva su ubicación relativa en la escala social (con excepción parcial de las mujeres, más proclives a simpatizar con el régimen). En esta dirección apunta, por ejemplo, la fuerza demostrada por los partidarios del gobierno en las elecciones estudiantiles de la Universidad de Chile efectuadas este año.

El cuadro social chileno es pues, de una significativa polarización de clases, mas compleja y diferente de la mera división entre explotadores y explotados. Dicho de otra manera, las actitudes de los sectores populares y de la clase media son sólo parcialmente congruentes, pues una fracción de ésta se sitúa en posiciones encontradas con las que caracterizan a las clases populares.

Especial gravitación en el acontecer chileno ha llegado a tener la Iglesia Católica. Tanto la jerarquía eclesiástica como el clero en general, han tenido un evidente liderato en la defensa de los derechos humanos y, lo que es quizás más importante a los fines del presente análisis, como conciencia crítica que denuncia con pasión creciente la injusticia de las políticas oficiales en el plano económico y social. Además, el manto protector de la Iglesia fué un importante apoyo para la actividad sindical en los períodos mas duros de la represión así como ha contribuído significativamente a la supervivencia de focos de actividad intelectual disidente.

Esta multifacética presencia ha dado a la Iglesia una indiscutible autoridad moral, creando los consiguientes problemas al gobierno, el que, sin embargo, los ha sabido sortear sin incurrir en costos políticos directos muy elevados. La razón de esta aparente contradicción puede estar en parte en que no hay unanimidad de criterios en la jerarquía eclesiástica respecto de las conflictivas materias antes enunciadas. Más importante puede ser el hecho de que la Iglesia no es un actor político, por lo que su intervención se limita al plano de la denuncia y la exhortación moral.

Desde otro punto de vista, la influencia de la Iglesia se ha acrecentado justamente por la peculiar naturaleza de su rol. La juventud intelectual, en particular, reconoce en ella un

faro orientador de protesta y esperanza, que en estos años adquirió una profundidad e impacto que no tuvo la conducción política de los partidos. Se ha formado así un importante contingente de "rebeldes con causa", críticos de los grupos políticos de todos los signos, empeñados en afanosa búsqueda de un nuevo proyecto de futuro. Resulta prematuro intentar un pronóstico en relación a la eventual canalización de tales inquietudes, pero su existencia constituye, sin duda, un factor a tomar en cuenta en el análisis político.

La Iglesia es, también, uno de los principales agentes involuntario quizás- de la movilización social, siendo el caso más reciente haber despertado la inquietud pública en relación al problema de la vivienda. Sin embargo como ocurre normalmente en una situación autoritaria, los instrumentos represivos directos e indirectos son un freno eficaz para una efectiva movilización social, al margen del grado de disenso y aún, de antagonismo latente que pueda haber en la sociedad. El temor a la pérdida del empleo y la suspensión o expulsión de estudiantes universitarios son mecanismos que en el caso chileno han sido decisivos para controlar a los únicos sectores que han mostrado signos reales de movilización potencial. Distinto es que bajo la superficie existan condiciones que la pueden hacer estallar cuando los riesgos disminuyan o la insatisfacción se convierta en cólera o desesperación. Al respecto, cabe consignar, que la experiencia histórica muestra que un cierto grado de prosperidad económica no elimina los conflictos ni las reivindicaciones sino que, por el contrario, las demandas sociales son planteadas con más fuerza por quienes han logrado resolver sus problemas básicos de subsistencia. En consecuencia, parece errada la "apuesta" del gobierno en el sentido de que la represión dejará de ser necesaria una vez que se complete la "modernización".

V. ¿Longevidad o institucionalización? Fuerza y debilidad del régimen autoritario chileno.

V.1 ¿Puede consolidarse el régimen autoritario chileno?

Todo régimen autoritario pretende institucionalizarse. Por tal concepto se entiende una situación en que, de una u otra manera, el régimen es aceptado por el pueblo, aunque sea de manera difusa y pasiva. En cierto sentido, se podría, en tal caso, decir que ha logrado establecer su hegemonía.

Esta forma de reconocimiento o respaldo pasivo mayoritario es condición necesaria para la existencia de un grado mínimo de legitimidad, por lo que cabría además afirmar que todo régimen autoritario, por represivo que sea, aspira a la larga a entrar a una fase en que la orientación política dominante es de tipo "inclusivo".

Al respecto, cabría señalar que hay una diferencia fundamental entre institucionalización de un régimen autoritario (sólo logrado por México en América Latina) y su mera duración cronológica o longevidad.

El análisis del caso chileno conduce a afirmar que el régimen actual no tiene posibilidad alguna de institucionalizarse en el sentido aquí dado al término, pero que en cambio su longevidad puede ser considerable y de hecho, ya lo ha sido.

En efecto, tal pretensión plantea problemas que parecen ser insuperables, entre los que cabe señalar los siguientes:

1. Su aceptación por una mayoría social es casi imposible de imaginar en Chile, donde el régimen ha operado sobre la base de un alto grado de coerción y de la exclusión sistemática de los sectores populares de toda participación o ingerencia en la toma de decisiones. Ni siquiera se ha realizado un intento serio de cooptación e integración de los trabajadores en uno o más movimientos gestados desde el gobierno. La influencia preponderante que, tradicionalmente, han tenido entre los trabajadores tanto la izquierda marxista como la democracia cristiana ha contribuído, sin duda, a la reticencia del gobierno a tratar de organizar movimientos de apoyo en este sector tan vital de la comunidad nacional.

En situación similar de exclusión y antagonismo se encuentran los intelectuales, la antigua clase política, además de la hostilidad, ya señalada, de la mayor parte de la Iglesia.

Para establecer un régimen hegemónico no basta el apoyo de algunos sectores sociales si, paralelamente, hay rechazo de otros; esto es particularmente válido si la separación entre apoyo y rechazo está dada en función principal de clases sociales. De ahí que, aunque tuviera éxito parcial el llamado a las clases medias emprendido por los "aperturistas" ello no sería suficiente para legitimar, ni al actual régimen militar ni a su eventual "transformación maquillada".

En suma, la polarización social es un factor decisivo, que hace en extremo difícil la pretensión de institu-

cionalización hegemónica en el sentido aquí dado al término.

2. No existe un sistema de sucesión presidencial ni es probable que se establezca en el futuro, al menos de manera suficientemente clara y definitiva, porque cualquier limitación en el tiempo resulta inaceptable para el General Pinochet. En consecuencia, en su confrontación con los "blandos" respecto de esta cuestión, sólo cabe esperar de él, medidas dilatorias y negociaciones ambiguas. En esas condiciones es difícil pensar que el régimen pueda sobrevivir a su caudillo.
3. El régimen no tiene una base de legitimidad ideológica de alcance nacional. La economía social de mercado y la modernización no son ideas-fuerza inspiradoras para todo un pueblo. Tampoco puede esperarse un impacto movilizador de consignas y concepciones preponderantemente negativas como anti-marxismo, anti-estatismo y anti-politicismo. Orden, seguridad, disciplina social y eficiencia son valores compartidos por la gran mayoría de los chilenos, pero se entiende que son bases normales de toda convivencia y de cualquier proyecto de futuro, por lo cual tampoco constituyen ya banderas generadoras de adhesión y legitimidad. Esto no invalida lo anteriormente señalado en orden a que sí se ha generado una ideología de la derecha.
4. La ausencia de mecanismos de real participación social y política. La coerción empleada a partir del 11 de Septiembre ha generado una gran rigidez. En particular,

la falta de alternativa en lo que respecta a la cúpula del régimen no sólo impide una apertura real hacia los sectores excluidos (ya que podría culminar u obligar a un cambio en la cúpula), sino que ha contribuido decisivamente a la inexistencia -ya definitiva- de un partido o movimiento gobiernista. Igual desconfianza exhiben los tecnócratas de Chicago y los grupos económicos, temerosos de que aún un "partido pinochetista" terminaría por ceder a la tentación del "populismo" redistributivo.

Poder Económico y Poder Militar se dan así la mano para impedir el desarrollo de formas de participación social y política que son condición necesaria para una consolidación hegemónica. El proyecto de "Transición" propuesto por el Consejo de Estado es la expresión clara de este criterio compartido.

#### V.2 La fuerza del régimen y su prolongación posible.

Las contradicciones y debilidades antes indicadas permiten afirmar que el régimen autoritario chileno no tiene, en cuanto tal, destino en el largo plazo. No es necesariamente contradictoria tal afirmación con la posibilidad de una consolidación parcial del modelo. Concretamente, si el régimen autoritario se prolonga suficientemente el país habrá avanzado un trecho largo por el camino de la modernización capitalista. En esas condiciones no será probable que se produzca ya una mutación radical de la organización económica, lo que tampoco significa que no puedan variarse muy sustancialmente los signos concentradores y excluyentes de la misma.

Al margen de este tipo de reflexiones que inciden en el tipo de democracia que los chilenos se propongan construir y en la capacidad de lograr acuerdo en torno a una fórmula viable, el examen de la situación chilena lleva a reconocer que mantienen aún su vigencia algunas condiciones que han permitido la ya larga subsistencia de un régimen autocrático.

Como a la mayoría de ellas se ha hecho alusión anteriormente o fluyen de lo ya dicho, se intentará, a continuación resumirlas sintéticamente:

1. La unidad y verticalidad del Ejército, característica propia del arma , que se ha visto acrecentada por los poderes asumidos por el Comandante en Jefe y los altos mandos de su confianza. Un estudio reciente revela la forma en que los mecanismos de calificación, promoción y retiro de la oficialidad se han adaptado a los requerimientos de ejercicio del poder por parte del Comandante en Jefe-Presidente de la República.
2. Los mecanismos de coerción, incluso la "represión por el estómago", que mantienen bajo control la presión social.
3. El estricto control gubernativo sobre la televisión y su cuasi - monopolio de los medios de comunicación, limita severamente la capacidad de los líderes políticos y sociales de la oposición para comunicarse con la base social. A su vez, el gobierno ha montado una maquinaria propagandística de indudable eficacia.

4. El apoyo social parcial -ya señalado- producido por una multiplicidad de factores como orden, seguridad, anticomunismo, las expectativas generadas por el consumismo, etc.
  
5. El equipo de Chicago ha logrado implantar una política extraordinariamente coherente y la ha aplicado con singular persistencia. Al margen de las críticas de fondo que se le hacen, es indudable que cualquier política aplicada de manera consistente da resultados. Se genera de esta manera, en algunos sectores de la sociedad una sensación de estabilidad y de expectativas de éxito, en tanto que otros sienten la inevitabilidad de prolongación del modelo. Estos fenómenos refuerzan la adhesión al régimen del gran capital, del empresariado en general y de grupos profesionales .

Por último, cabría señalar que la acción iniciada este año a través de los municipios es la primera manifestación de una eventual "cara populista" del régimen, el que procurará exhibir algún éxito o progreso en el campo de las reformas económicas y sociales.

6. La fortaleza del equipo económico es un factor de apoyo al régimen por parte del capital extranjero y especialmente, de los círculos financieros internacionales que miran con temor la eventualidad de una restauración democrática en el país. Por lo demás, la política de apertura financiera al exterior que el grupo Chicago ha ido aplicando con creciente vigor, tiene como objetivo político crear lazos de dependen-

cia que hagan muy difícil un cambio de rumbo en Chile, (o que al menos lo atenúe al máximo.

7. La fragmentación del cuestionamiento social al régimen, en el sentido que la "clausura" política mantiene a cada sector social actuando en el plano funcional que le es propio, sin que se globalice la disidencia, única forma de que afecte al régimen en sí mismo. Es así como los estudiantes han tenido que limitar sus actividades a los problemas universitarios los trabajadores a los asuntos laborales, etc.
8. El predominio de los partidos demócratacristianos y comunista produce una fragmentación similar a la anterior ( y la refuerza) en el plano propiamente político. Las acciones concertadas son difíciles en este contexto esencialmente bipolar, tanto por los obstáculos intrínsecos ya referidos como por el aprovechamiento por parte de la máquina publicitaria del gobierno de todo intento o apariencia de "colusión" entre estos eventuales "socios" tan dispares.
9. El punto anterior es, en definitiva, expresión parcial del hecho de que la intensa polarización social y política previa al 11 de Septiembre dificulta las alianzas y convierte la convergencia entre quienes fueron adversarios enconados en un proceso extremadamente difícil que requiere una larga gestación.

10. Por fin, muchos de los factores anteriores, contribuyen, sin duda, al escepticismo de los Estados Unidos cuya preocupación por los derechos humanos es, sin duda, genuina, pero que difícilmente comprometerá su apoyo activo a una fórmula de sustitución del régimen mientras no vea con claridad el tipo de democracia y, en especial el orden económico que los chilenos quieran construir en el contexto de la futura democracia.

VI. Restauración y consolidación de la democracia. La interdependencia entre la transición y el mediano plazo.

Del análisis precedente se deduce que el cuadro social y político chileno es complejo y está marcado por un alto grado de polarización. Es posible afirmar, también, que sólo una minoría apoya al régimen actual pero que de acuerdo a la "correlación de fuerzas" existente, el gobierno conserva una posición bastante sólida para el corto plazo.

Dada esta situación, ¿de qué manera y en qué forma podrá producirse el retorno a la democracia? Un primer intento de análisis conduce a examinar casos recientes de transición desde el autoritarismo a la democracia producidos en otros países. España, Portugal, Grecia, Perú y Ecuador son ejemplos cercanos, así como lo es la revolución nicaraguense cuyo rumbo no está aún suficientemente definido y el trágico e inconcluso caso de El Salvador.

El estudio de estas experiencias revela una gran diversidad de escenarios y secuencias. Quizás la única conclusión que, para

los fines del presente trabajo, pueda extraerse de ellos es que es muy difícil predecir la manera en que cae o llega a su término un régimen autoritario, Más aventurado aún es tratar de planificar un proceso de este tipo, como lo prueba el hecho de que sólo algunos de los intentos de salvar o desestabilizar regímenes de distinto signo, emprendidos por los servicios de inteligencia de las grandes potencias, han tenido éxito.

Por otra parte, es indudable que hay una multiplicidad de factores, procesos, situaciones y circunstancias que favorecen u obstaculizan el tránsito a la democracia en cualquier caso concreto. Parece, por ello, razonable sostener que aunque no se identifique el conjunto de condiciones suficientes para el término del régimen autoritario, sí es posible enunciar los requisitos necesarios y asumir la tarea de lograr su materialización.

Hay por lo menos una hipótesis implícita en el razonamiento anterior. Asumir una tarea y planificar su ejecución, significa generar y conducir o, al menos, contribuir, a un proceso sobre cuyo desarrollo se mantiene un cierto grado de control. La actual situación de El Salvador, por ejemplo, se nos presenta, en contraste, como un ejemplo, en que todos los actores sociales han perdido esa capacidad de dirección, por lo que el desenlace de ese drama tiene ya mucho de "ruleta rusa".

En la medida que sea factible generar una proporción elevada de las condiciones necesarias, será más probable que el proceso histórico real, que nos indicará ex-post cuál ha sido la solución efectiva, se acerque a lo que pueda ex-ante ser considerado como solución óptima por los actores sociales involucrados.

El desafío de cualquier ejercicio futuroológico es, en síntesis, descubrir los requisitos de una fórmula posible que sea, al mismo tiempo, una solución "buena".

Como ya se indicó, el de Chile no es un caso fácil. El régimen autoritario dispone de fuerza coactiva, de poder económico y de cierto grado de respaldo social. La coalición gobernante está integrada o ha sido apoyada por actores e instituciones que no desaparecerán por el mero hecho de que caiga el régimen. Tal es el caso de las Fuerzas Armadas, los grupos sociales privilegiados, el empresariado, el capital internacional y el sector juntista de la clase media. Dicho de otra manera, en Chile hay fuerzas importantes, hoy predominantes en términos de poder, que vetan cualquier retorno a la democracia y que iniciado un proceso de transición democrática buscarán, afanosamente, cualquier oportunidad para revertir la historia.

En virtud de lo anterior, en el restablecimiento de la democracia cabe distinguir un período de transición o restauración y otro de consolidación democrática. El análisis no puede pues, limitarse tan sólo a la etapa de transición. La guerra no se habrá ganado mientras la democracia no esté firmemente arraigada en las instituciones y el comportamiento social.

Hay signos evidentes de que los chilenos perciben de este modo el futuro. Es por eso que reclaman la "alternativa" o sea el proyecto político capaz de forjar una democracia estable. Es obvio también que esta percepción genera una relación de interdependencia entre transición y consolidación, de modo que la visión que los distintos actores sociales tengan respecto de

esta segunda etapa afecta su comportamiento frente a la primera. Así lo ha entendido el gobierno uno de cuyos "Slogans" publicitarios más socorridos es que en Chile es inevitable el caos (o el "comunismo") si las Fuerzas Armadas entregan el Poder.

La afirmación anterior es, por cierto, relativa. A medida que pasa el tiempo es cada vez mayor el número de chilenos que entienden que su único objetivo es el fin de la dictadura y que están dispuestos a que "la alternativa" surja del propio proceso histórico. El instinto político práctico se une a la creciente rebeldía de los intelectuales y de los oprimidos para sostener que "cada día tiene su afán". Lo que debe quedar claro es que lo que se gana en eficacia de corto plazo puede perderse en términos de falta de control de un proceso que adquirirá caracteres agudamente conflictivos si no hay algún concierto previo en relación a la consolidación democrática.

#### VII. Los problemas de la consolidación.

Es normal que una crisis tan profunda como la que se desencadenó en Chile, genere toda clase de posiciones revisionistas acerca de los modos más adecuados de organización y convivencia social. Lo que los años de autoritarismo han hecho emerger en forma sorprendentemente explícita es un cuestionamiento ideológico de la democracia política desde la derecha. Esta nueva descalificación se añade a la denuncia ya clásica proveniente de la izquierda que, esgrimiendo razones, por cierto, contrapuestas a las críticas actuales, han acusado a la democracia de ser solo formal.

En una perspectiva de futuro, lo anterior significa que aunque se diga lo contrario, la democracia no es el régimen político obviamente preferido por todos los chilenos. Es efectivo que el problema de los derechos humanos ha producido un progresivo reconocimiento de los méritos intrínsecos de la demo-

cracia política en círculos de izquierda. Sin embargo, dado que sus puntos de partida en relación a esta materia son tan distintos, demócratacristianos y social demócratas, demócratas liberales y marxistas no saben en verdad si sus respectivas concepciones de la democracia son o no coincidentes o semejantes a las de los demás.

Hay aquí una tensión básica que no pueden eludir quienes aborden la construcción de una nueva democracia para el Chile de mañana. La ambigüedad resultante de esta situación es un factor que magnifica algunas tensiones propias de la democracia que, entre nosotros, aparecen exacerbados por la experiencia concreta vivida por los chilenos y por las formulaciones ideológicas contrapuestas que hoy se disputan las conciencias.

En primer término, la explosión del conflicto social y político en los últimos años de régimen democrático, la radicalidad creciente de las propuestas o exigencias de transformación, la ya señalada percepción recíproca de amenaza entre clases sociales y el brusco viraje en 180 grados impuesto al país a partir del 11 de Septiembre de 1973, ponen dramáticamente de relieve la tensión entre continuidad y cambios inherentes a la democracia.

Un país del tercer mundo como Chile requiere de un proceso persistente de cambio social, dada la magnitud de las desigualdades y carencias que lo caracterizan. Por otra parte, tanto la tradición y la cultura como la defensa de intereses materiales o el mero instinto conservador son ingredientes de una cierta continuidad. La convivencia democrática que procura conciliar

el gobierno de la mayoría con el respeto a los derechos de las minorías pone de relieve la difícil conciliación entre ambos ingredientes del proceso social.

Visto desde el ángulo de la justicia el problema del cambio en democracia implica que privilegios inicialmente considerados como no-negociables por quienes los detentan pasan a ser negociables como consecuencia de la presión social y terminan por ser cedidos, al menos, parcialmente, a otros grupos. En este proceso, que se renueva una y otra vez, se manifiesta una cierta gradualidad propia del cambio democrático.

La radicalización producida en Chile a comienzos de la década del 70, se tradujo en un progresivo rechazo del gradualismo por parte de las élites políticas e intelectuales. Frente a esta tendencia, cortada de raíz el 11 de Septiembre se yergue hoy, en revancha, una inmensa soberbia de la derecha económica y política. En estos años, posiciones de privilegio a las que ya se había renunciado no solo han sido recuperadas sino que se declara enfáticamente que han pasado a la categoría de no-negociables.

La convivencia democrática será nuevamente posible en Chile si los proyectos de transformación reconocen los límites que impone el principio de gradualidad, lo que a su vez sólo será viable si las clases y sectores dominantes entienden que la coexistencia social con un razonable grado de armonía es incompatible con la inamovilidad de los privilegios. Dicho de otra manera, se requiere el cumplimiento de las dos condiciones recién enunciadas, para que la democracia esté en condiciones de asumir el conflicto social de modo que la concertación predomine sobre la confrontación.

Desde la perspectiva de los sectores populares y de la clase media las observaciones precedentes se concretan en la ya crónica disparidad entre aspiraciones y realidad. Los proyectos transformadores o populistas prometen satisfacer las demandas en tanto que las posiciones más prudentes o conservadoras realizan las limitaciones que imponen los hechos y datos objetivos. En todo caso hay siempre un techo dado por el ritmo con que es posible desarrollar las fuerzas productivas y crear nueva riqueza, el que choca con el efecto demostración del nivel de vida ya alcanzado por las naciones más avanzadas y por las clases más favorecidas del propio país. La larga tradición populista chilena se verá, sin duda, multiplicada por la expresión multiplicada de demandas reprimidas durante el período autocrático, lo que incide, sin duda, en el período de transición. Se trata, sin embargo, en Chile de un desequilibrio permanente que ha estado en el centro del conflicto político y social. Hacerle frente con éxito es condición de posibilidad de la consolidación democrática.

Los problemas recién enunciados otorgan mayor significación a otra particularidad del régimen político democrático cual es la incertidumbre, ligada al concepto de alternancia en el poder. Se hizo tradicional en el Chile democrático de las últimas décadas, decir que en cada elección presidencial se jugaba el destino del país, por lo que esas elecciones fueron percibidas cada vez más como un juego de todo o nada. En el último año de mandato de cada presidente, el país reducía el ritmo de su marcha, la inversión sufría drástica reducción y los gobernantes, ya desgastados y sin perspectivas claras de continuidad en la orientación global de sus políticas, perdían su capacidad de conducción del país.

La reflexión anterior está ligada al hecho indiscutido que cualquier política requiere ser aplicada coherentemente y sin claudicaciones durante un período de tiempo mas o menos prolongado para ser realmente eficaz. El gobierno militar y, en especial, el equipo de Chicago han hecho resaltar su fidelidad a este principio y lo exhiben como una ventaja del régimen autoritario sobre la democracia. Hay en esta afirmación elementos de crítica real que plantean a la futura democracia chilena el desafío de lograr mayorías claras y estables de gobierno como condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto político. Esta observación tiene, sin duda, validez permanente, pero en el nuevo contexto un juicio negativo respecto a la eficacia democrática se convierte en causa o pretexto de deslegitimación del sistema.

De manera general, se está procediendo a inculcar a los chilenos valores no-democráticos y prioridades que, en la percepción de muchos, se cumplen mejor en un régimen autoritario. Esto último se aplica a la seguridad (entendida en sentido individual amplio), el orden público y la disciplina social. Desde un punto de vista mas conceptual se está procurando persuadir al pueblo chileno de que el bien común está mejor asegurado si la élite interpreta los deseos de los gobernados en vez de la "peligrosa" y "anarquizante" tendencia democrática a la participación y la representación. Asimismo, se sostiene que la eficiencia es mas importante que el "control democrático" y que éste es un obstáculo "politiquero" para aquélla. En suma, sólo un sistema elitario y restrictivo de gobierno puede conducir al país hacia el progreso.

Estrecha relación con lo anterior tiene el llamado al egoísmo, involucrado en la exaltación del individualismo, del plan per-

sonal de vida en desmedro de la preocupación por los problemas colectivos. En la medida que tales valores penetran en las conciencias se produce apatía y la consiguiente indiferencia en relación al régimen político y demás problemas de interés público.

Un último complemento de este esquema es el desarrollo de mecanismos controlados de participación social en la base, cuidando de mantener atomizada la sociedad a nivel nacional. Recursos para los municipios manejados por alcaldes de confianza del régimen (hay muchos ejecutivos jóvenes de la Escuela de Chicago y de la Universidad Católica entre los alcaldes actuales) y máxima dificultad para la acción de confederaciones de trabajadores son ejemplos que ilustran lo dicho.

Las observaciones precedentes tienen importancia en la medida que se perciba que la lucha por conquistar "el corazón de la clase media" resulta decisiva para las posibilidades de consolidación democrática. Si entre ella y los sectores populares, además del desnivel existente en términos de bienestar material y de cultura, se abriera un foso provocado por valores contrapuestos, el proceso democrático se enfrentaría a un nuevo y serio obstáculo.

Es éste solamente uno de muchos problemas que deberá resolver "la alternativa", vale decir el proyecto político que sea capaz de conducir al país por la ruta de la consolidación democrática. No hay duda que, dada la situación que en este documento se ha esbozado, se requiere una expresión social y política claramente mayoritaria para emprender con éxito la tarea

enunciada. Para decirlo en forma más gráfica, el primer Presidente elegido democráticamente por los chilenos deberá tener un apoyo superior al 60% de los electores, para que la democracia quede investida de legitimidad y autoridad suficientes para resistir las presiones de los poderosos, la tentación del cuartelazo y el riesgo de ser sobrepasada por la eventual movilización social reivindicatoria.

La "alternativa" no consiste sólo en elegir a un Presidente y un Parlamento democráticos, pues deberá producir y reflejar un acuerdo suficiente en torno a algunas materias fundamentales entre las que cabe citar, al menos, las siguientes:

1. Concordancia en torno a lo que se entiende por democracia y lo que se espera de ella y consenso en la aceptación de un conjunto de "reglas del juego" democrático.
2. La naturaleza general del orden económico, sin duda el más difícil de los tópicos colocados en la agenda de la discusión política, dadas las concepciones discrepantes que en el pasado han caracterizado a las diversas vertientes ideológicas y partidos políticos.
3. Un acuerdo preciso que implique la decisión clara de impedir y combatir cualquier brote de violencia o terrorismo.

El grado de convergencia que se produzca en relación a estas materias marcará el ámbito del acuerdo posible en la etapa de consolidación democrática y determinará con más precisión quienes serán los "socios" de dicha empresa. Ello permitirá aquilatar hasta qué punto se habrá logrado gestar una efectiva mayoría social y política y su capacidad de maniobra o "poder potencial".

A su vez, lo anterior será evaluado por los distintos actores sociales e influirá en su comportamiento en relación a la transición. Las perspectivas de ésta serán mejores en tanto el acuerdo posible se acerque a la imagen que el pueblo se haya formado en relación al consenso necesario y si las Fuerzas Armadas perciben tal acuerdo como presión suficiente para tener que renunciar al poder.

#### VIII. Los problemas de la transición.

Son múltiples las interrogantes que suscita el análisis hecho en los párrafos anteriores. Sin embargo, las preguntas más difíciles de responder se refieren a la transición como fase inicial de un nuevo proceso democrático. Quien esto escribe entiende que sólo puede haber transición a la democracia a partir del momento en que el General Pinochet ya no detente la cúpula del poder político; los pasos previos solo serán la acumulación de lo que aquí se ha denominado condiciones necesarias para la transición.

¿Cómo se producirá ese decisivo punto de inflexión? ¿Quiénes conducirán el país en el período de transición? ¿Cuál será el rol de las Fuerzas Armadas en esta etapa?

Desde una perspectiva global se plantean dos hipótesis extremas para la transición. Por una parte se piensa que la caída del régimen será el producto de la movilización social cuya manifestación ideal mas radical es la huelga general, pero que, en todo caso, es una activación que compromete al cuerpo social y expresa una explícita rebeldía o repudio colectivo. En el otro polo se sitúan quienes apuestan a un cambio de rumbo provocado desde el gobierno por los propios detentadores del

poder. Es el camino de la persuasión, la confianza en que es posible convencer a las Fuerzas Armadas y demás socios de la coalición gobernante que se plieguen al camino democrático.

Ya se han señalado los obstáculos que frenan el proceso movilizador. Reprimidas y fragmentadas, a las fuerzas sociales les resulta difícil producir por esa vía el cambio de régimen. En ese sentido, no son muchos los ejemplos históricos que vayan en abono de quienes depositan su fé en la movilización social como agente directo y principal del cambio, a menos que se inscriba en esta categoría la prolongada guerrilla sandinista o la virtual guerra civil de El Salvador. Distinto es afirmar que la movilización latente o potencial de la base social y de sus organizaciones es un factor necesario de decisiva importancia para producir la transición.

La hipótesis de que los gobernantes autoritarios se convertirán a la democracia no parece verosímil y debe ser descartada. En efecto, es contraria a toda presunción lógica del comportamiento probable de los gobernantes que tienen posiciones ideológicas tomadas y cuya conducta está inevitablemente influida por una constelación de factores en las que juegan intereses, el goce de poder y el temor a la "vendetta". Viene al caso aquí, también, recordar nuevamente que los altos mandos militares actuales se han ido seleccionando con criterios en que la confiabilidad política desde el punto de vista del Comandante en Jefe, debe haber desplazado a consideraciones basadas exclusivamente en la idoneidad profesional. Además, como ya se indicó, los mecanismos de calificación y promoción vigentes determinan un alto grado de dependencia de la oficialidad respecto del Jefe del Estado, el que además dispone del poderoso instrumento de control que son los servicios de seguridad.

Por otra parte, a menos que se produzca el súbito desplome del régimen, lo que no es probable dada su fuerza y alto grado de homogeneidad, y suponiendo que el país no entre en la trágica senda de la vía violenta, el inicio de la transición implica el abandono del poder por sus actuales ocupantes. ¿Qué puede, entonces inducirlos u obligarles a ello?.

Ya se ha señalado reiteradamente que no cabe intentar profecías en materia de evolución política, de modo que lo que sigue no es mas que un conjunto de sugerencias muy tentativas orientadas a servir de base de discusión. Un primer requisito indispensable para forzar el retiro de los actuales gobernantes es la existencia de una actitud social de rechazo que produzca en ellos la percepción de que el costo de aferrarse al poder resulta excesivo.

Es indudable que una situación de esa naturaleza se produce también en la medida que surjan conflictos internos que produzcan divisiones serias en la coalición gobernante. Es posible que la confrontación entre duros y blandos llegue a ser significativa en este sentido. De mayor importancia sería el estallido de luchas de poder entre personas o grupos rivales. Las Fuerzas Armadas, en especial, son estrechamente sensibles a cualquier amenaza de división porque para los militares la cohesión institucional es condición básica de su capacidad de desempeño profesional.

En relación con lo anterior cabe añadir que el prolongado ejercicio del poder sin restricciones ni control, conduce casi inevitablemente a la aparición de diversas formas de corrupción y de conflicto interno. Hechos recientes como el ya mencionado escándalo del impuesto al valor agregado y el terrorismo para-estatal se inscriben dentro de esa lógica.

Desde otro ángulo, factores como los recién señalados y especialmente la percepción de existencia de una alternativa "razonable", puede contribuir a levantar el "veto" al sistema democrático que hasta aquí ha caracterizado el comportamiento de diversos actores del drama chileno. El régimen se debilitará si se deteriora la imagen de seguridad y estabilidad que ha sido su principal activo a los ojos de la clase media y de los empresarios, a la vez que garantía política para los Estados Unidos y condición de posibilidad de la inversión extranjera y del flujo financiero del exterior. Perdidas sus ventajas, el régimen autoritario tendría ya poco que ofrecer a quienes lo han sostenido en razón de tales beneficios.

La conjunción de conflicto interno, repudio social y existencia de alternativa viable es la combinación óptima de factores conducentes al fin del autoritarismo chileno por la vía no-violenta.

A medida que uno o mas de estos factores se haga presente con fuerza suficiente, se vislumbra el avance hacia la transición en base a un proceso de liberalización progresiva, forzado por las circunstancias, el que culminará en un grado tal de pérdida de legitimidad y autoridad que no dejaría a los gobernantes mas opción que el abandono del poder.

Los espacios de libertad conquistados por el movimiento sindical son un ejemplo típico a nivel sectorial de una apertura involuntaria provocada por las amenazas de boycott. En ese sentido, los progresos en un sector generan oportunidades en otras áreas, la que puede dar origen a un proceso dinámico de reacción en cadena.

Es necesario señalar aquí, nuevamente, que esta posibilidad se ve entorpecida y frenada por las dificultades que confronta la movilización social. En general, ésta es promovida en cualquier sector por un grupo de líderes cuyo ejemplo induce una reacción más masiva. El paso a esta segunda etapa requiere tiempo y capacidad de comunicación entre los líderes y la base, condicionantes que difícilmente se dan en una situación dictatorial. La eficacia de los mecanismos represivos reside en que los intentos de movilización son controlados en la etapa de la acción del pequeño núcleo dirigente, impidiéndose la transmisión del movimiento a una base más amplia. Así por ejemplo, la suspensión o exoneración de 50 estudiantes universitarios evita la propagación de su protesta a digamos, cinco mil de sus compañeros, a los que sería prácticamente imposible reprimir.

La movilización generada por líderes carismáticos de nivel nacional o por aquellos individuos que por distintas razones gozan de cierto fuero o impunidad no se produce dado el estricto control de los medios de comunicación que ejerce el gobierno. Además, ese tipo de actos, es ajeno a la tradición política chilena e involucra riesgos personales considerables. En definitiva, Chile ha sido hasta ahora, más un país de burgueses que de "ayatollahs".

Las reflexiones precedentes indican que el cambio de régimen probablemente habrá de ser de una acumulación de hechos y procesos desintegradores y de la construcción simultánea de los cimientos del sistema democrático de reemplazo.

En todo caso, las observaciones hasta aquí formuladas permiten afirmar que no serán las Fuerzas Armadas las que guiarán al país por el difícil camino de la liberalización. Sus actuales

altos mandos están comprometidos con el sistema vigente, de modo que sólo una "vuelta de campana" en la conducción de los institutos armados podría abrir esa posibilidad. Por ello, y dado el inevitable fenómeno de politización castrense que se ha producido en estos años, no puede contarse durante la transición con la neutralidad de las Fuerzas Armadas. El retorno de éstas a un rol estrictamente profesional, concebido de manera que no las aisle del resto de la comunidad nacional, es condición necesaria para la consolidación democrática, pero todo hace suponer que se requerirá un largo proceso para conseguir este objetivo, a menos que el cambio se produzca por desplome o derrocamiento violento en cuyo caso se generarían situaciones imposibles de predecir.

La posibilidad de forzar una transición no-violente hacia la democracia depende, también, de algunos factores de difícil control y manejo que es vital enfrentar con decisión y claridad. En primer término, resulta imprescindible evitar o contribuir a sofocar cualquier brote de terrorismo. La "vía armada" a la democracia no es sólo una contradicción lógica y un proceso que no admite una conducción racional. En el caso de nuestro país en que hay una larga tradición de respeto por la vida humana (ciertamente maltrecha en estos años) el terrorismo tendrá como resultado el definitivo rechazo de la clase media a la salida democrática, sería un factor aglutinante para la coalición gubernativa. Además, favorecería la cohesión política interna de las Fuerzas Armadas al sentirse éstas amenazadas en lo que es la base fundamental de su poder y la garantía de su subsistencia institucional, cuál es el monopolio de las armas.

Por otra parte, es natural que la concentración de la riqueza y la represión, hechos inaceptables de este tiempo, generan

la reacción de muchos que esperan la apertura política para cobrar las cuentas acumuladas. Los "juicios de Nüremberg" y la "expropiación de los ricos" constituyen una tentación respaldada por una legítima demanda de justicia. Al respecto, solo cabe señalar que la práctica de "ojo por ojo y diente por diente" es incompatible con una convivencia democrática, por lo que el "castigo de los culpables" deberá limitarse a casos flagrantes y extremos. El temor a este tipo de situaciones, es un importante factor de reticencia o rechazo a la democracia de muchos militares y empresarios.

Desde una perspectiva mas general, este último problema no es sino la aplicación al período de transición de la necesidad ya enunciada de restablecer entre las distintas clases y sectores sociales un conjunto de garantías mutuas suficientes que así sean percibidas por ellos, única forma de asumir y canalizar las tensiones y conflictos propios de una sociedad del tercer mundo en permanente proceso de cambio.

Por último, cabría recordar que la coyuntura autoritaria genera un alto grado de desconcierto e incomunicación en la sociedad, lo que realza la importancia de quienes ejercen o están en condiciones de asumir funciones de liderazgo. En definitiva la élite política e intelectual del país tiene una gran responsabilidad pues de su comportamiento y de su conducción orientadora que sea capaz de dar, depende en alto grado la posibilidad de generar las condiciones necesarias para una transición no violenta del autoritarismo a la democracia.

IX. Un comentario final.

Ya redactado este documento, se ha producido la convocatoria a plebiscito para el 11 de Septiembre. El General Pinochet, ciñéndose a la lógica que fluye del análisis aquí realizado ha elegido un camino que concilia las demandas de la derecha y de los blandos en general con las posiciones de los duros y con sus propios intereses.

En efecto, el articulado transitorio de la Constitución establece normas, minuciosamente regladas que resuelven el problema del reemplazo del General Pinochet para el caso de su eventual fallecimiento o imposibilidad de continuar ejerciendo el cargo. La Derecha, en consecuencia, logra lo que ha sido su exigencia fundamental: un sistema de sucesión que permita prolongar el régimen mas allá del General Pinochet. Por otro lado, desde el punto de vista personal y de los duros, ha programado su permanencia en el poder por 16 años mas, completando casi un cuarto de siglo de dictadura, sin someterse al veredicto popular. Por lo demás, dado que la nueva Constitución puede ser modificada en cualquier instante por acuerdo de la Junta y un posterior plebiscito controlado por el gobierno, no hay seguridad alguna de que el General Pinochet vaya a entregar el poder en 1998.

Desde el punto de vista del país y de la oposición el camino elegido por el General Pinochet implica entrar a una fase en que al pueblo prácticamente no le queda sino el derecho a rebelión. Sin duda que será entonces el propio General Pinochet, las Fuerzas Armadas y la Derecha económica y política los responsables de la eventual evolución de Chile hacia la confrontación violenta.

Los detentadores del poder han decidido imponerse por la fuerza, desestimando la alternativa de un intento hegemónico sujeto a una efectiva capacidad de persuasión. En estas condiciones, posiciones de moderación democrática como las que inspiran este trabajo, tienden a quedar obsoletas, porque se magnifican todos los factores que conspiran en contra de la viabilidad del consenso no-violento que, a juicio de quien esto escribe, es el único que puede realmente conducir a la consolidación de la democracia y por ende a una convivencia pasífica entre los chilenos. Se requiere una enorme voluntad, un compromiso intransigente y un alto grado de auto-control para seguir luchando de acuerdo a las reglas que dicta la lógica de la paz.